

Departamento de Justicia de los Estados Unidos: Descripción general de su estructura, misión y operaciones.

Generado por: Asistente Legal de
IA. Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc.

3 de febrero de 2026

© 2026 Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Generado por un Asistente Legal de IA. Con la colaboración del Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Todos los derechos reservados.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS: INTEGRAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA, LA MISIÓN Y LAS OPERACIONES

Generado por: Asistente Legal de IA | Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. | 3 de febrero de 2026

Resumen ejecutivo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos es la principal agencia de aplicación de la ley del gobierno federal, y opera bajo una misión fundamental establecida en 1870 y perfeccionada a través de sucesivas administraciones.^{[1][3]} Con más de 115 000 empleados distribuidos en más de 40 organizaciones componentes, el Departamento de Justicia mantiene una vasta red de oficinas regionales que abarcan los cincuenta estados, territorios y más de cincuenta países en todo el mundo.^[1] El departamento opera a través de divisiones y agencias cuidadosamente estructuradas que gestionan colectivamente el enjuiciamiento penal federal, los litigios civiles, las operaciones de aplicación de la ley, las amenazas a la seguridad nacional, la protección del medio ambiente y los asuntos de justicia administrativa. Este informe ofrece un análisis exhaustivo de la arquitectura organizativa, las divisiones operativas, las misiones principales y el posicionamiento estructural actual del Departamento de Justicia a principios de 2026, brindando orientación a profesionales, funcionarios gubernamentales y al público en general que interactúan con esta institución federal crucial o necesitan comprenderla.

Misión, valores y autoridad fundamental del Departamento de Justicia

Establecimiento histórico y fundamento constitucional

El Departamento de Justicia se originó mediante una acción del Congreso en el marco de la Ley Judicial de 1789, que estableció el cargo de Fiscal General y le otorgó la responsabilidad de brindar asesoría legal al Presidente y a los departamentos gubernamentales.^[3] El departamento en sí fue formalmente establecido por ley en junio de 1870, con el Fiscal General designado como su titular.^[3] Esta estructura fundacional refleja el reconocimiento constitucional de que el gobierno federal requiere experiencia legal centralizada y capacidad de aplicación para administrar la ley federal de manera uniforme en todo el país. La ubicación del Departamento de Justicia dentro del poder ejecutivo, con el Fiscal General reportando directamente al Presidente pero manteniendo independencia profesional en las decisiones de enjuiciamiento, representa un equilibrio institucional cuidadosamente calibrado entre la rendición de cuentas política y la discreción procesal basada en la ley y no en preferencias políticas.

Marco de la misión tripartita

El Departamento de Justicia opera bajo una clara declaración de misión tripartita que ha perdurado a través de administraciones políticas y cambios ideológicos.^{[1][3]} La misión declarada es "defender el estado de derecho, mantener a nuestro país seguro y proteger los derechos civiles".^{[1][3]} Esta formulación refleja tres obligaciones gubernamentales distintas pero interrelacionadas: primero, el compromiso procesal de garantizar que la ley se aplique de manera uniforme y justa de acuerdo con sus términos sin tener en cuenta la influencia política o la preferencia personal; segundo, la obligación protectora de prevenir y responder a las amenazas a la seguridad nacional, la empresa criminal y la violencia; y tercero, el deber afirmativo de remediar la discriminación y hacer cumplir las garantías constitucionales de igualdad de protección y derechos individuales.^{[1][3][6]} Estos tres pilares informan la toma de decisiones en todos los componentes del Departamento de Justicia y teóricamente

Proporcionar un marco coherente para conciliar prioridades contrapuestas a la hora de determinar la asignación de recursos o el énfasis estratégico.

Valores institucionales fundamentales

Más allá de la declaración de misión, el Departamento de Justicia ha articulado valores fundamentales que teóricamente guían la conducta de sus 9200 abogados y demás personal.[8] El departamento enfatiza la independencia y la imparcialidad, comprometiéndose a seguir los hechos y la ley "dondequiera que conduzcan, sin prejuicios ni influencias indebidas".[1][3][8] Este valor refleja un compromiso con la discreción procesal basada en el mérito en lugar de consideraciones políticas, aunque la implementación práctica de este principio ha variado entre administraciones y sigue sujeta a un debate legítimo sobre qué constituye una priorización política apropiada frente a una politización indebida.[1][8] El segundo valor fundamental articulado es la honestidad y la integridad, que exige que los empleados del Departamento de Justicia se adhieran a "los más altos estándares de comportamiento ético" propios de la principal agencia de aplicación de la ley del país.[1][3] Un tercer valor enfatiza el respeto por las diferencias entre las personas y las ideas, exigiendo un trato justo y digno independientemente del estatus protegido o el punto de vista.[1][3][8] Finalmente, el Departamento de Justicia identifica la excelencia como un valor, comprometiéndose a brindar "los más altos niveles de servicio al pueblo estadounidense" y a actuar como "un administrador responsable del dinero de los contribuyentes".[1][3][8] Estos valores, si bien son de carácter aspiracional, establecen una base institucional para la conducta profesional e informan los estándares disciplinarios administrados a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional.[3][27]

Arquitectura organizacional y estructura de liderazgo

El Fiscal General y el liderazgo ejecutivo

El Fiscal General de los Estados Unidos funge como jefe del Departamento de Justicia y reporta directamente al Presidente.[1][3] El Fiscal General es el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y ejerce una amplia autoridad delegada para dirigir y administrar todos los componentes del Departamento de Justicia, establecer prioridades de aplicación de la ley y establecer posiciones legales sobre asuntos de importancia nacional.[3][55] El Fiscal General es asistido por un Fiscal General Adjunto y un Fiscal General Asociado, cada uno de los cuales ejerce autoridad delegada sobre distintas áreas dentro del departamento.[2][8] La actual Fiscal General, a partir de septiembre de 2025, es Pamela Bondi, como consta en los organigramas oficiales firmados por ella en ese mes.[5][8]

El Fiscal General Adjunto funge como el segundo funcionario de mayor rango dentro del departamento y generalmente proporciona supervisión y dirección general a las unidades organizativas del Departamento.[2][8] El Fiscal General Adjunto asesora y asiste al Fiscal General en la formulación e implementación de políticas y programas departamentales y ejerce autoridad de supervisión sobre las principales agencias de aplicación de la ley e investigación, incluyendo la Oficina Federal de Investigación, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Prisiones, la Oficina de Programas de Justicia, los Fiscales de los Estados Unidos y los Estados Unidos Servicio de Alguaciles.[2][8]

El Fiscal General Adjunto ocupa el tercer puesto en el escalafón y asesora y asiste al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto en materia de justicia civil, aplicación de la ley federal y local, y asuntos de seguridad pública.[2][8] El Fiscal General Adjunto suele supervisar los componentes relacionados con la aplicación de los derechos civiles, los litigios ambientales y de recursos naturales, y las funciones relacionadas con la justicia civil.[2][8]

La Oficina del Procurador General

La Oficina del Procurador General ocupa una posición distintiva y de vital importancia dentro del Departamento de Justicia.

estructura organizativa, representando al gobierno federal ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en prácticamente todos los casos en los que los Estados Unidos son parte.[44][47] El Procurador General es el cuarto funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia, nombrado por el Presidente y reportando directamente al Fiscal General.[47] El Procurador General determina qué casos el gobierno llevará a la Corte Suprema para su revisión, las posiciones que el gobierno presentará ante la Corte y si el gobierno participará como amicus curiae en casos en los que no es parte.[44] Los Estados Unidos están involucrados en aproximadamente dos tercios de todos los casos que la Corte Suprema decide sobre el fondo cada año, lo que demuestra la importancia de esta oficina.[44] El actual Procurador General es D. John Sauer, desde el 4 de abril de 2025.[47] La oficina del Procurador General también revisa los casos resueltos desfavorablemente para los Estados Unidos en tribunales inferiores para determinar si se justifica una apelación y, de ser así, qué posición procesal se debe adoptar.[44] Esta función de control otorga al Procurador General una influencia extraordinaria sobre el desarrollo de la legislación federal y las posiciones estratégicas que el gobierno defiende en los litigios de apelación.

Componentes organizativos principales: Organismos encargados de hacer cumplir la ley

La Oficina Federal de Investigación

La Oficina Federal de Investigación (FBI), como principal agencia de investigación dentro del Departamento de Justicia (DOJ), ocupa una posición central en las operaciones federales de aplicación de la ley.[25][28] La misión del FBI es proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución de los Estados Unidos, operando como una agencia de seguridad nacional y aplicación de la ley que recopila, analiza y comparte inteligencia en todas sus funciones.[25][28] El FBI persigue un doble mandato: hacer cumplir la ley federal y proteger la seguridad nacional.[25] Esta doble función ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia del FBI, con la agencia pasando de una postura tradicional centrada en el enjuiciamiento a un modelo impulsado por la inteligencia y la interrupción de amenazas.[25]

Las prioridades de la misión actual del FBI, a partir de 2025-2026, incluyen proteger a los Estados Unidos de ataques terroristas; proteger a la nación contra operaciones de inteligencia extranjeras, espionaje y operaciones cibernéticas; combatir la actividad ciberdelictiva significativa; combatir la corrupción pública en todos los niveles; proteger los derechos civiles; combatir las empresas criminales transnacionales; combatir los delitos de cuello blanco graves; y combatir los delitos violentos graves.[25][28] El FBI opera oficinas regionales en todas las ciudades principales y mantiene oficinas de agregados legales internacionales en más de cincuenta países, lo que permite la coordinación con los servicios de inteligencia y aplicación de la ley extranjeros.[1] El mandato legal del FBI se deriva del Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 533, que autoriza al Fiscal General a nombrar funcionarios para detectar y enjuiciar delitos contra los Estados Unidos, con facultades de investigación específicas adicionales otorgadas por ley para categorías de delitos particulares.[28]

La Administración para el Control de Drogas

La Administración para el Control de Drogas opera como una agencia independiente dentro del Departamento de Justicia dedicada a hacer cumplir las leyes y regulaciones sobre sustancias controladas.[37][40] La misión de la DEA es hacer cumplir las leyes y regulaciones sobre sustancias controladas de los Estados Unidos y llevar al sistema de justicia penal y civil a aquellas organizaciones y miembros principales involucrados en el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas destinadas al tráfico ilícito en los Estados Unidos.[37][40] Las responsabilidades principales de la DEA incluyen la investigación y preparación del enjuiciamiento de los principales infractores de las leyes sobre sustancias controladas que operan a nivel interestatal e internacional; la investigación y el enjuiciamiento de delincuentes y bandas de narcotraficantes que perpetran violencia y aterrorizan a las comunidades; la gestión de programas nacionales de inteligencia sobre drogas en cooperación con funcionarios federales, estatales, locales y extranjeros; la incautación y decomiso de activos derivados de o destinados a ser utilizados en el tráfico ilícito de drogas; la aplicación de la fabricación, distribución y dispensación de sustancias controladas

disposiciones aplicables a sustancias producidas legalmente; coordinación con las fuerzas del orden estatales y locales en esfuerzos mutuos de lucha contra las drogas; y coordinación con gobiernos extranjeros en programas diseñados para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas a través de métodos no coercitivos.[37]

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, comúnmente conocida como ATF, se centra en la prevención de delitos violentos derivados del uso ilegal de armas de fuego, explosivos e incendios provocados.[8][39][42] La ATF protege a las comunidades estadounidenses al enfrentar los delitos violentos mediante la identificación y el desmantelamiento de traficantes ilegales de armas de fuego que alimentan la violencia armando a personas prohibidas, miembros de pandillas, cárteles de la droga, inmigrantes ilegales y organizaciones terroristas.[8][39][42] La ATF se concentra en identificar y desmantelar estas redes de tráfico a través de inteligencia avanzada sobre armas de fuego, incluida la Red Nacional Integrada de Información Balística (NIBIN), el rastreo de armas de fuego y el análisis de ADN de contacto en asociación con las fuerzas del orden estatales y locales para investigar, identificar y enjuiciar a los delincuentes violentos.[8][39]

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, una de las agencias federales de aplicación de la ley más antiguas, mantiene múltiples carteras operativas distintas.[20][23][38][41] El Servicio de Alguaciles ha sido responsable de proteger el proceso judicial federal desde 1789, sirviendo como el brazo ejecutor de los tribunales federales.[38] Las responsabilidades actuales del Servicio de Alguaciles incluyen seguridad judicial (proteger a los jueces federales, jurados y otros miembros del poder judicial federal y garantizar procedimientos judiciales seguros); aprehensión de fugitivos (localizar y aprehender a fugitivos por delitos federales y, cuando se solicita, a fugitivos estatales y locales); operaciones de prisioneros (administrar la detención de personas puestas bajo custodia de los Alguaciles); transporte de prisioneros a través del Sistema de Transporte de Prisioneros y Extranjeros del Departamento de Justicia; decomiso de bienes (sirviendo como custodio principal de la propiedad incautada para el programa federal de decomiso de bienes); y apoyo a programas de niños desaparecidos en asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.[38]

El Servicio de Alguaciles actualmente dirige 56 grupos de trabajo locales de búsqueda de fugitivos, la mayoría de los cuales operan como esfuerzos de tiempo completo.[20][41] Estos grupos de trabajo combinan a alguaciles federales con personal policial estatal y local, creando grupos de trabajo permanentes y ad hoc en respuesta a casos que representan amenazas inmediatas a la seguridad pública.[20][41] El Servicio de Alguaciles tiene la autoridad de arresto más amplia entre las agencias policiales federales, lo que le permite perseguir a fugitivos federales a través de los límites jurisdiccionales.[38]

La Oficina Federal de Prisiones

La Oficina Federal de Prisiones opera como el componente de custodia responsable de administrar a los delincuentes federales sentenciados a penas de prisión.[3][6][43][46] La BOP opera más de 100 instalaciones en todo el país y es responsable de garantizar que los delincuentes federales cumplan sus sentencias en instalaciones seguras, humanas, rentables y con la seguridad adecuada.[6][43][46] La BOP también tiene la tarea de proporcionar programas de reinserción para asegurar el regreso exitoso de las personas encarceladas a la comunidad, reconociendo que la mayoría de las personas encarceladas eventualmente serán liberadas y requerirán servicios de rehabilitación para reducir la reincidencia. [6][46] La BOP además mantiene la responsabilidad de la población de reclusos condenados por delitos graves del Distrito de Columbia, lo que representa una responsabilidad única a nivel estatal dentro de una agencia federal.[6]

Divisiones de litigios: Justicia civil y penal

La División Penal

La División Penal ha desarrollado, aplicado y supervisado la aplicación de leyes penales federales no asignadas específicamente a otros componentes durante más de cien años, a menudo en colaboración con las 93 Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos.[7] La misión de la División Penal es servir al interés público mediante la aplicación rigurosa, justa y eficaz de los estatutos penales y los estatutos civiles conexos; ejercer la supervisión general sobre la aplicación de la ley penal federal con la excepción de los estatutos asignados específicamente a otras divisiones; y fortalecer la capacidad de sus contrapartes extranjeras en materia de estado de derecho.[7][8] La División Penal formula e implementa políticas de aplicación de la ley penal, brinda asesoramiento y asistencia en materia penal al Fiscal General, al Fiscal General Adjunto, a los fiscales federales, a las agencias de aplicación de la ley e investigación y a otros componentes del Departamento de Justicia, y proporciona liderazgo a sus contrapartes federales, estatales y locales en materia de aplicación de la ley, así como a socios internacionales.[7]

La División Penal comprende 16 secciones y oficinas, cada una de las cuales aborda áreas distintas del derecho penal federal y su aplicación.[7] Estas incluyen la Sección de Apelaciones (que representa los intereses del Departamento de Justicia en la Corte Suprema de los Estados Unidos y los Tribunales de Apelación en materia de derecho penal); la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (que identifica y procesa a los depredadores sexuales de menores y previene la victimización infantil); la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (que previene, investiga y procesa delitos cibernéticos y de propiedad intelectual, incluidos los delitos relacionados con criptomonedas, el ransomware y la piratería digital); la Sección de Fraude (que investiga y procesa delitos complejos de cuello blanco, fraude financiero, fraude en el sector de la salud y corrupción extranjera); la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (que investiga y procesa el contrabando de personas, la trata de personas, el trabajo forzoso, las violaciones de los derechos humanos y ciertos delitos violentos internacionales); la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (que lleva a cabo procesos penales y recuperación de activos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero); la Sección de Integridad Pública (que investiga y procesa la corrupción de funcionarios electos y designados en todos los niveles de gobierno y los delitos electorales federales); la Sección de Impuestos (que hace cumplir las leyes tributarias de la nación a través de litigios penales); y la Sección de Delitos Violentos y Extorsión (que desarticula y desmantela pandillas y grupos del crimen organizado regionales, nacionales e internacionales).[7]

La División Penal también mantiene varias oficinas especializadas que promueven la coherencia en los procesos penales federales.[7] La Sección de Casos de Pena Capital promueve la coherencia y la equidad en las solicitudes de pena de muerte en todo Estados Unidos.[7] La Oficina de Operaciones de Cumplimiento proporciona apoyo en materia de investigación y enjuiciamiento, así como asesoramiento legal sobre herramientas de investigación sofisticadas y delicadas.[7] La Oficina de Políticas y Litigios desarrolla, revisa y evalúa políticas y legislación nacionales sobre delitos, sentencias y correcciones.[7]

La División Civil

La División Civil representa a los Estados Unidos, sus departamentos y agencias, miembros del Congreso, funcionarios del Gabinete y empleados federales en asuntos civiles y penales dentro de su ámbito de responsabilidad.[10] La misión de la División Civil abarca la defensa contra impugnaciones a programas federales; garantizar que el gobierno federal hable con una sola voz en lo que respecta a la interpretación legal; preservar la intención del Congreso; promover la credibilidad del gobierno ante los tribunales; y proteger el fisco público (Tesoro de los Estados Unidos).[10] La división opera a través de varias áreas programáticas que abordan distintos dominios de litigio, incluidos litigios comerciales, litigios de cumplimiento y afirmativos, litigios de programas federales y reclamaciones por agravios.[10]

La División de Derechos Civiles

La División de Derechos Civiles, creada en 1957 mediante la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1957, trabaja para defender los derechos civiles y constitucionales de todas las personas en los Estados Unidos, en particular las poblaciones vulnerables.[45] La división hace cumplir los estatutos federales que prohíben la discriminación basada en raza, color, sexo, discapacidad, religión,

estado familiar, origen nacional y estado de ciudadanía.[45] La División de Derechos Civiles opera a través de múltiples secciones que abordan los derechos de voto, la educación, el empleo, la vivienda, los lugares públicos, la coordinación y el cumplimiento federales, la conducta policial y categorías protegidas específicas.[45]

Divisiones especializadas en litigios

La División de Medio Ambiente y Recursos Naturales se erige como el bufete de abogados ambientales de la nación y el más grande del país en materia ambiental.[13][16] La ENRD hace cumplir las leyes ambientales civiles y penales, incluyendo la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y los estatutos sobre desechos peligrosos, al tiempo que protege los recursos naturales de la nación y maneja casos relacionados con los derechos y recursos de las tribus.[13][16] La división está organizada en secciones que abordan delitos ambientales, cumplimiento, defensa, adquisición de propiedades, vida silvestre y recursos marinos, recursos naturales, recursos tribales y asuntos de apelación.[13]

La División Antimonopolio promueve la competencia económica mediante la aplicación y la orientación sobre las leyes y principios antimonopolio. [14][17] La División Antimonopolio lleva a cabo investigaciones y litiga casos que involucran alegaciones de conducta anticompetitiva, impugnaciones de fusiones y asuntos relacionados con el derecho de la competencia.[14][17]

La División de Impuestos hace cumplir las leyes tributarias del país a través de litigios penales y civiles, promoviendo el cumplimiento tributario voluntario, manteniendo la confianza pública en la integridad del sistema tributario y desarrollando una legislación tributaria sólida.[21]

[24] La División de Impuestos trabaja en estrecha colaboración con el Servicio de Impuestos Internos y coopera con la Comisión de Bolsa y Valores en asuntos relacionados con el fraude corporativo y la integridad.[21]

Operaciones de Seguridad Nacional e Inteligencia

La División de Seguridad Nacional

La División de Seguridad Nacional ocupa la máxima prioridad estratégica dentro de la estructura del Departamento de Justicia, lo que refleja el compromiso del departamento con la lucha contra el terrorismo y la protección de la seguridad nacional.[9][12] La misión de la División de Seguridad Nacional es proteger a los Estados Unidos de las amenazas a la seguridad nacional mediante la búsqueda de justicia a través de la ley. [9][12] La estructura organizativa de la División de Seguridad Nacional está diseñada para garantizar esfuerzos coordinados de enjuiciamiento y aplicación de la ley que trabajen conjuntamente con los abogados de la comunidad de inteligencia, fortaleciendo así la eficacia del gobierno federal en materia de seguridad nacional.[9]

La NSD gestiona múltiples áreas operativas, incluyendo la prevención y el enjuiciamiento del terrorismo, operaciones de espionaje y contrainteligencia, controles de exportación y aplicación de sanciones, protección de información clasificada, aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y operaciones de vigilancia de inteligencia extranjera bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.[9] La NSD coordina la aplicación de la ley antiterrorista a nivel nacional mediante la colaboración con la Rama de Seguridad Nacional del FBI, agencias de la comunidad de inteligencia y 94 Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos, desarrollando estrategias nacionales para combatir las amenazas terroristas emergentes y en evolución, incluyendo el terrorismo cibernético.[9] La división supervisa el programa del Consejo Asesor Antiterrorista de Seguridad Nacional (ATAC), manteniendo redes de comunicación esenciales entre el Departamento de Justicia y las Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos para la rápida transmisión de información sobre amenazas terroristas y actividades de investigación.[9]

La División de Seguridad Nacional (NSD) representa a los Estados Unidos ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y el Tribunal de Revisión de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para obtener autorización bajo la Ley FISA para actividades de recopilación de inteligencia.[9] La división brinda asesoría legal a las agencias de la comunidad de inteligencia sobre la interpretación de la Ley FISA y los procedimientos legales relacionados con la misma, al tiempo que supervisa ciertas actividades de inteligencia extranjera para garantizar

cumplimiento de los requisitos constitucionales, estatutos, órdenes del FISC y políticas del Poder Ejecutivo que protegen la privacidad individual y las libertades civiles.[9]

Componentes de soporte, administrativos y especializados

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que opera bajo autoridad delegada del Fiscal General, resuelve casos de inmigración interpretando y administrando de manera justa, expedita y uniforme las leyes de inmigración del país.[1][2][5][6] [55] La EOIR lleva a cabo procedimientos judiciales de inmigración, revisiones de apelación y audiencias administrativas a través de los Tribunales de Inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración.[1][3] El avance de la aplicación justa, expedita y uniforme de las leyes de inmigración es una prioridad declarada para el Departamento de Justicia, reconociendo que la capacidad de la EOIR para procesar casos de manera oportuna afecta directamente la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para expulsar a los extranjeros deportables de manera expedita y utilizar los recursos de detención de manera eficiente. [6] La EOIR mantiene ubicaciones específicas dentro del norte de California, incluidas ubicaciones del Tribunal de Inmigración de San Francisco y un lugar de audiencia en Concord.[1][6]

La Oficina de Acceso a la Justicia

La Oficina para el Acceso a la Justicia opera como una agencia independiente dentro del Departamento de Justicia que planifica, desarrolla y coordina la implementación de iniciativas de políticas de acceso a la justicia de alta prioridad para el Departamento y el Poder Ejecutivo.[57][60] Restablecida en octubre de 2021, la oficina aborda la crisis de acceso a la justicia en los sistemas legales penales y civiles.[57][60] La misión es ayudar al sistema de justicia a brindar eficientemente resultados que sean justos y accesibles para todos, independientemente de su riqueza y estatus, al tiempo que mejora la comprensión y la capacidad del gobierno federal para abordar las necesidades legales urgentes de las comunidades en todo Estados Unidos.[8][57][60]

La Oficina para el Acceso a la Justicia trabaja de acuerdo con tres principios rectores: Ampliar el acceso aumentando la disponibilidad de asistencia jurídica y defensa pública; Acelerar la innovación apoyando la investigación, los datos y las estrategias innovadoras para mejorar la equidad y la eficiencia; y Salvaguardar la integridad promoviendo políticas y reformas que mejoren la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal y la integridad del sistema jurídico.[57][60] La oficina lidera el Programa Federal de Pro Bono del Gobierno, un esfuerzo interinstitucional que alienta a los abogados y al personal jurídico del gobierno federal a participar en trabajo pro bono, y administra el concurso del Premio de Acceso a la Justicia que promueve soluciones innovadoras para abordar la crisis del acceso a la justicia.[57]

El Servicio de Relaciones Comunitarias

El Servicio de Relaciones Comunitarias opera como el "pacificador" del Departamento para los conflictos comunitarios que surgen de disputas basadas en la identidad, desempeñando esta función durante más de 60 años.[31][34] Establecido por el Título X de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el CRS reúne a diversas partes interesadas de la comunidad para resolver disputas que surgen de prácticas discriminatorias basadas en la raza, el color o el origen nacional.[31][34] La Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd, Jr. de 2009 amplió la jurisdicción del CRS para proporcionar servicios de reconciliación para las comunidades que enfrentan tensión por presuntos crímenes de odio cometidos por motivos de raza, color, origen nacional, género, identidad de género, orientación sexual, religión o discapacidad.[31]

La misión de CRS es proporcionar servicios de prevención de la violencia y resolución de conflictos para resolver y prevenir disputas a nivel comunitario, operando como una parte neutral e imparcial sin autoridad de fiscalía, investigación o aplicación de la ley.[31][34] CRS trabaja directamente con unidades de gobierno estatales y locales, organizaciones privadas y públicas, grupos de derechos civiles, fuerzas del orden y líderes comunitarios para apoyar los esfuerzos de resolución

conflictos y prevención de la violencia.[31][34] Los especialistas en conciliación y directores regionales de CRS están ubicados en todo Estados Unidos, construyendo relaciones de confianza con los líderes comunitarios locales y utilizando prácticas comprobadas de resolución de disputas para liderar la resolución colaborativa de problemas que abordan las raíces del conflicto.[31][34]

La Oficina de Asesoría Jurídica

La Oficina de Asesoría Legal, a menudo descrita como "el abogado del Fiscal General", proporciona asesoramiento y asistencia legal al Presidente y a las agencias ejecutivas sobre cuestiones constitucionales y estatutarias que afectan las operaciones del poder ejecutivo. [32][35] El deber principal de la OLC es asistir al Fiscal General en su función como asesor legal del Presidente y de las agencias del Poder Ejecutivo, con recursos sustanciales dedicados a proporcionar asesoramiento legal a la Casa Blanca, al Fiscal General y a otras agencias sobre cuestiones legales de vital interés nacional.[32][35] La OLC ejerce la autoridad delegada al Fiscal General en virtud de la Ley Judicial de 1789 para proporcionar asesoramiento determinante a los funcionarios del poder ejecutivo sobre cuestiones de derecho.[32][35]

La OLC debe brindar asesoramiento sincero, independiente y basado en principios, incluso cuando sea inconsistente con los objetivos de los legisladores, reafirmando los principios de larga data que guían el trabajo de la OLC al proporcionar opiniones escritas formales y orientación legal.[32][35] La oficina revisa la forma y la legalidad de todas las Órdenes Ejecutivas y proclamaciones y memorandos sustantivos que emita el Presidente, así como todas las órdenes propuestas por el Fiscal General y las regulaciones que requieren la aprobación del Fiscal General. [32]

La Oficina de Responsabilidad Profesional

La Oficina de Responsabilidad Profesional, establecida en 1975 en respuesta a la mala conducta profesional asociada con el escándalo Watergate, garantiza que los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) realicen sus funciones de acuerdo con los altos estándares profesionales que se esperan de la principal agencia de aplicación de la ley del país.[27][30] La misión principal de la OPR es llevar a cabo investigaciones de denuncias de mala conducta profesional contra abogados del DOJ relacionadas con el ejercicio de la autoridad para investigar, litigar o brindar asesoramiento legal, incluidas las denuncias de mala conducta contra jueces de inmigración del DOJ.[27][30]

La OPR recibe y revisa denuncias de mala conducta profesional, revisa los hallazgos judiciales de mala conducta o críticas a los abogados del DOJ, lleva a cabo investigaciones preliminares e investigaciones completas cuando corresponde, informa los hallazgos a la Unidad de Revisión de Mala Conducta Profesional, remite los asuntos a los jefes de componentes apropiados para que tomen medidas correctivas y, cuando está autorizado, informa los hallazgos a las autoridades disciplinarias de los abogados estatales.[27][30] La oficina recibe y revisa denuncias de represalias contra personas que divulgan información sobre mala conducta de abogados o fuerzas del orden, asegurando que los empleados estén protegidos de represalias cuando denuncian mala conducta.[27][30]

La Oficina del Inspector General

La Oficina del Inspector General promueve la integridad, la eficiencia y la rendición de cuentas dentro del Departamento de Justicia investigando presuntas violaciones de leyes penales y civiles por parte de los empleados y realizando auditorías e inspecciones de programas.[2] [49] A principios de 2026, la OIG mantiene un trabajo de auditoría continuo que abarca numerosos componentes del Departamento de Justicia, incluidas investigaciones de políticas confidenciales de fuentes humanas, procesos de registro de la DEA, operaciones de la base de datos de ADN del FBI, adjudicaciones de contratos del FBI, delegaciones especiales del FBI, mitigación de aeronaves no tripuladas de la Oficina Federal de Prisiones, cumplimiento de la seguridad de la información federal y auditorías anuales de estados financieros.[49]

La Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos

La Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos proporciona apoyo ejecutivo y administrativo a los 93 Fiscales de los Estados Unidos ubicados en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Guam, las Islas Marianas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.[15] [18] La misión de la EOUSA es proporcionar apoyo ejecutivo general.

asistencia y supervisión a las 94 Oficinas de Fiscales de los Estados Unidos y coordinación de la relación entre los Fiscales de los Estados Unidos y los componentes organizativos del Departamento de Justicia y otras agencias federales en Washington, DC[15][18] EOUSA brinda asesoramiento y apoyo con respecto a los nombramientos de Fiscales de los Estados Unidos, administra la asignación de USAO, incluyendo la autoridad presupuestaria y los recursos de personal, analiza datos estadísticos y proporciona informes y recomendaciones sobre el trabajo y los recursos de USAO.[15]

La EOUSA formula, implementa y administra políticas de recursos humanos a nivel de oficina para las USAO, gestiona sistemas integrados de tecnología de la información, evalúa el desempeño de las USAO, brinda asesoramiento sobre programas e iniciativas legales, brinda asesoramiento legal sobre asuntos disciplinarios y de desempeño, centraliza los programas de igualdad de empleo y procesamiento de quejas, responde a las solicitudes de la FOIA y la Ley de Privacidad, brinda orientación sobre relaciones con el Congreso y supervisa la Oficina de Educación Legal que desarrolla y lleva a cabo la capacitación para los abogados y el personal del Departamento de Justicia.[15] La actual Directora de la EOUSA es Francey Hakes.[18]

La División de Gestión de Justicia

La División de Gestión de Justicia fortalece la capacidad del Departamento de Justicia para lograr sus metas y objetivos, maximiza el retorno de las inversiones en programas y brinda servicios de calidad relacionados con la organización, la gestión y la administración.[8] La JMD brinda asesoramiento y orientación a la alta dirección con respecto a todas las funciones administrativas del departamento.[8]

Operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico

Los grupos de trabajo para el control del narcotráfico y el crimen organizado

Los Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado representan la pieza central de la estrategia del Fiscal General para combatir el crimen organizado transnacional y reducir la disponibilidad de narcóticos ilegales a nivel nacional mediante un enfoque multiagencia liderado por fiscales.[50][53] Establecido en 1982 en respuesta a las preocupaciones por la epidemia de cocaína, el OCDETF aprovecha los recursos y la experiencia de múltiples departamentos asociados del gabinete en investigaciones empresariales concentradas, coordinadas y a largo plazo.[50][53] La misión es reducir el suministro de drogas y disminuir la violencia asociada y las actividades delictivas organizadas transnacionales que representan las mayores amenazas para la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad nacional.[50][53]

OCDETF está compuesto por representantes del FBI, DEA, IRS, ATF, Servicio de Inmigración y Naturalización, Servicio de Alguaciles de EE. UU., Servicio de Aduanas de EE. UU. y Guardia Costera, con capacidad de seguimiento del Departamento de Defensa disponible en ciertas regiones.[50] El programa está organizado geográficamente en nueve regiones, cada una con un Consejo Asesor y un Grupo de Coordinación que establecen políticas y prioridades, con Grupos de Coordinación de Distrito que revisan los casos para la designación de OCDETF a nivel de distrito.[50]

La OCDETF gestiona la formulación semestral de la Lista Consolidada de Objetivos de Organizaciones Prioritarias (CPOT) del Fiscal General, que identifica los elementos de "comando y control" de las organizaciones más prolíficas de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero a nivel nacional.[50] El programa también requiere la identificación de los principales Objetivos de Organizaciones Prioritarias Regionales como parte de los procesos anuales del Plan Estratégico Regional.[50] Desde la creación del programa hasta 2006, las operaciones de la OCDETF dieron lugar a más de 44 000 condenas relacionadas con drogas y a la incautación de más de tres mil millones de dólares en activos monetarios y patrimoniales.[50]

A partir del año fiscal 2025-2026, la estructura de OCDETF está experimentando una reorganización significativa, con la disolución del programa como componente independiente en la reorganización y el presupuesto del año fiscal 2026 del Departamento de Justicia, con la redistribución de recursos en presupuestos de componentes y la transferencia de muchos casos y funciones de OCDETF a nuevas entidades.

creó grupos de trabajo de seguridad nacional.[50]

Proyecto Vecindarios Seguros

El Proyecto Vecindarios Seguros es un programa que reúne a todos los niveles de las fuerzas del orden y a las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y la violencia armada y hacer que los vecindarios sean más seguros.[11] El programa representa una estrategia que fortalece las prioridades federales de las fuerzas del orden basadas en principios fundamentales que incluyen fomentar la confianza y la legitimidad en las comunidades, apoyar a las organizaciones comunitarias que previenen la violencia, establecer prioridades de aplicación de la ley enfocadas y estratégicas, y medir los resultados.[11] El PSN forma parte de la Operación Recuperar América, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades de los perpetradores de delitos violentos.[11]

Programas de subvenciones y apoyo comunitario

La Oficina de Programas de Justicia

La Oficina de Programas de Justicia otorga miles de millones de dólares anualmente para apoyar actividades de seguridad pública y justicia en comunidades de todo el país.[19] Los fondos de la OJP apoyan la infraestructura, la contratación de agentes del orden, la asistencia a las víctimas, la capacitación y la asistencia técnica, la investigación y los programas que mejoran los sistemas de justicia penal, civil y juvenil en jurisdicciones federales, estatales, locales y tribales.[19][22]

Programa de subvenciones de la Oficina COPS

La Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS), establecida en 1994, ha invertido más de veinte mil millones de dólares en policía desde su creación.[33][36] COPS otorga subvenciones que permiten a las agencias policiales estatales, locales y tribales contratar y capacitar a agentes de policía, al tiempo que promueve prácticas policiales eficaces y colaborativas.[33] [36] La Oficina COPS opera como los principales expertos en policía proactiva del Departamento de Justicia (DOJ), abordando los desafíos comunitarios emergentes y mejorando la seguridad de los agentes y la comunidad a través de recursos de subvención que apoyan programas integrales que incluyen el desarrollo de la policía comunitaria, la acreditación, la capacitación en desescalada y respuesta a crisis, programas contra la metanfetamina, grupos de trabajo contra la heroína, prevención de la violencia escolar e iniciativas policiales especializadas.[33]

Desarrollos estructurales actuales y direcciones futuras

A principios de 2026, el Departamento de Justicia se somete a una importante reevaluación organizativa que refleja cambios en las prioridades y las estrategias de asignación de recursos. La propuesta de disolución de la OCDETF como programa independiente, con la redistribución de recursos a los presupuestos de sus componentes y la transferencia de casos a los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional, representa una reorganización estructural sustancial que afecta a los acuerdos de cooperación de larga data y a los mecanismos de coordinación de la aplicación de la ley.[50] Estos cambios reflejan las prioridades del Poder Ejecutivo que establecen la Operación Take Back America como el marco organizativo para la respuesta de las fuerzas del orden federales a la aplicación de la ley en materia de inmigración, el desmantelamiento de cárteles y la reducción de la delincuencia violenta.[11]

El departamento mantiene su compromiso con su misión tripartita de defender el estado de derecho, garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos civiles, pero el énfasis relativo y la asignación de recursos entre estos objetivos varían según las prioridades de la administración y las decisiones de financiación del Congreso. La configuración estructural actual enfatiza una mayor coordinación entre la aplicación de la ley en materia de inmigración y la delincuencia común.

La aplicación de la ley mediante la creación de Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional refleja la determinación política de que estos ámbitos de aplicación de la ley deben estar más estrechamente integrados que lo que proporcionaba la estructura anterior de la ODETF.

Conclusión

El Departamento de Justicia representa una de las entidades organizativas más grandes y complejas del gobierno federal, ya que combina la autoridad fiscal, las operaciones policiales, la representación legal de los Estados Unidos, las operaciones de seguridad nacional, la protección de los derechos civiles y las funciones de justicia administrativa dentro de una única estructura institucional. Sus más de 115 000 empleados, distribuidos en más de cuarenta organizaciones componentes y oficinas regionales que abarcan todo Estados Unidos y numerosos países extranjeros, llevan a cabo misiones que van desde litigios ante la Corte Suprema hasta la prevención de la violencia comunitaria, desde operaciones antiterroristas hasta la aplicación de la ley ambiental, desde el enjuiciamiento penal federal hasta la protección de los derechos civiles.

Comprender la estructura organizativa, el marco de misión y los componentes operativos del Departamento de Justicia es fundamental para los profesionales que trabajan en asuntos legales federales, ya sea en procedimientos de inmigración ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), enjuiciamientos penales federales, litigios civiles contra o en nombre de los Estados Unidos, o en la coordinación con agencias federales de aplicación de la ley. El compromiso histórico del departamento con el estado de derecho, la independencia y la imparcialidad, la honestidad y la integridad, y el respeto a todas las personas, si bien no siempre se materializa en la práctica, proporciona una base institucional que distingue la aplicación de la ley y el enjuiciamiento federales de los enfoques que priorizan los objetivos políticos o de políticas públicas sobre los principios legales.

Las iniciativas de reorganización actuales de 2026 reflejan decisiones políticas deliberadas para reordenar las prioridades de aplicación de la ley y reestructurar los acuerdos de los grupos de trabajo de larga data, lo que demuestra que la estructura institucional no es inmutable, sino que refleja las decisiones políticas contemporáneas. Los profesionales y las partes interesadas deben monitorear los desarrollos en curso en este proceso de reorganización y mantenerse al tanto de cómo los cambios en la estructura, la asignación de recursos y la designación de prioridades afectan el funcionamiento práctico de los componentes del Departamento de Justicia que afectan sus áreas de práctica y los intereses de sus clientes.^{[1][3][6][8][50][53]}

Bibliografía y documentación de fuentes

[1] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Acerca del Departamento de Justicia. Recuperado de <https://www.justice.gov/about>

[2] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Vista de mapa/cuadro de agencias. Recuperado de <https://www.justice.gov/agencies/chart/map>

[3] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Manual de Organización, Misión y Funciones. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/organization-mission-and-functions-manual>

[4] USAGov. (s.f.). Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Recuperado de <https://www.usa.gov/agencies/us-department-of-justice>

[5] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Organigrama (versión de texto). Recuperado de <https://www.justice.gov/agencies/organizational-chart-text-version>

[6] Repositorio de desempeño del poder ejecutivo de EE. UU. (s.f.). Departamento de Justicia. Recuperado de <https://obamaadministration.archives.performance.gov/agency/department-justice.html>

- [7] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Penal. (s.f.). Descripción general de la División Penal. Recuperado de <https://www.justice.gov/criminal>
- [8] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Organigramas de agencias (cuadrícula). Recuperado de <https://www.justice.gov/agencies/chart/grid>
- [9] División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). División de Seguridad Nacional. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/national-security-division>
- [10] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Civil. (s.f.). Descripción general de la División Civil. Recuperado de <https://www.justice.gov/civil>
- [11] Administración para el Control de Drogas. (20 de agosto de 2025). El Departamento de Justicia anuncia los resultados de las operaciones coordinadas destinadas a reducir la delincuencia violenta. Recuperado de <https://www.dea.gov/press-releases/2025/08/20/justice-department-announces-results-coordinated-operations-aimed>
- [12] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Seguridad Nacional. (s.f.). Misión de la División de Seguridad Nacional. Obtenido de <https://www.justice.gov/nsd>
- [13] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s.f.). Más información sobre la División. Recuperado de <https://www.justice.gov/enrd/about>
- [14] División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Acerca de la División. Recuperado de <https://www.justice.gov/atr/about-division>
- [15] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos - Manual de Organización, Misión y Funciones. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/organization-mission-and-functions-manual-executive-office-united-states-attorneys>
- [16] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s.f.). División de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de <https://www.justice.gov/enrd>
- [17] División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). División Antimonopolio. Recuperado de <https://www.justice.gov/atr>
- [18] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos. Recuperado de <https://www.justice.gov/usao/eousa>
- [19] Oficina de Programas de Justicia. (s.f.). Subvenciones/Financiamiento. Recuperado de <https://ojp.gov/funding>
- [20] Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. (s.f.). Grupos de trabajo para la búsqueda de fugitivos. Recuperado de <https://www.usmarshals.gov/what-we-do/fugitive-investigations/fugitive-task-forces>
- [21] Wikipedia. (s.f.). División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Recuperado de <https://en.wikipedia.org/wiki/UnitedStatesDepartmentofJusticeTaxDivision>
- [22] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Subvenciones. Recuperado de <https://www.justice.gov/grants>
- [23] Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. (s.f.). Fugitivos con perfil. Recuperado de <https://www.usmarshals.gov/what-we-do/fugitive-apprehension/profiled-fugitives>
- [24] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Impuestos. (s.f.). División de Impuestos. Recuperado de <https://www.justice.gov/archives/tax>

- [25] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina Federal de Investigación. (s.f.). Misión de la Oficina Federal de Investigación. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/federal-bureau-investigation>
- [26] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina sobre la Violencia contra la Mujer. (s.f.). Oficina sobre la Violencia contra la Mujer (OVW). Recuperado de <https://www.justice.gov/ovw>
- [27] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Responsabilidad Profesional. (s.f.). Oficina de Responsabilidad Profesional. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/office-professional-responsibility>
- [28] Wikipedia. (s.f.). Oficina Federal de Investigación. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/FederalBureauof_Investigation
- [29] The Hotline. (s.f.). Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica: Apoyo en casos de violencia doméstica. Recuperado de <https://www.thehotline.org>
- [30] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Responsabilidad Profesional. (s.f.). Bienvenido a la OPR. Recuperado de <https://www.justice.gov/opr>
- [31] Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Servicio de Relaciones Comunitarias: Manual de Organización, Misión y Funciones. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/organization-mission-and-functions-manual-community-relations-service>
- [32] Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Oficina de Asesoría Jurídica. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/office-legal-counsel>
- [33] Oficina COPS. (s.f.). Subvenciones. Recuperado de <https://cops.usdoj.gov/grants>
- [34] Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Servicio de Relaciones Comunitarias. Obtenido de <https://www.justice.gov/crs>
- [35] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de Asesoría Jurídica. (s.f.). Mejores prácticas para el asesoramiento jurídico y las opiniones escritas de la OLC. Recuperado de <https://www.justice.gov/olc/best-practices-olc-legal-advice-and-written-opinions>
- [36] Servicio de Investigación del Congreso. (24 de abril de 2025). Los Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (COPS) Programa: Historia, financiación y posibles problemas para su reautorización. Recuperado de <https://www.congress.gov/crs-product/R48151>
- [37] Administración para el Control de Drogas. (s.f.). Misión. Recuperado de <https://www.dea.gov/about/mission>
- [38] Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. (s.f.). Hojas informativas. Recuperado de <https://www.usmarshals.gov/resources/fact-sheets>
- [39] Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. (s.f.). ATF: Inicio. Recuperado de <https://www.atf.gov>
- [40] Administración para el Control de Drogas. (s.f.). Acerca de. Recuperado de <https://www.dea.gov/who-we-are/about>
- [41] Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. (s.f.). Grupos de trabajo para la búsqueda de fugitivos. Recuperado de <https://www.usmarshals.gov/what-we-do/fugitive-investigations/fugitive-task-forces>
- [42] Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. (s.f.). Acerca de la ATF. Recuperado de <https://www.atf.gov/about>

- [43] Oficina Federal de Prisiones. (s.f.). Buscar un recluso. Recuperado de https://www.bop.gov/mobile/find_inmate/byname.jsp
- [44] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina del Procurador General. (s.f.). Acerca de la Oficina. Recuperado de <https://www.justice.gov/osg/about-office>
- [45] División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). División de Derechos Civiles. Recuperado de <https://www.justice.gov/crt>
- [46] Oficina Federal de Prisiones. (s.f.). BOP: Sitio web de la Oficina Federal de Prisiones. Recuperado de <https://www.bop.gov>
- [47] Wikipedia. (s.f.). Procurador General de los Estados Unidos. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/SolicitorGeneraloftheUnited_States
- [48] División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Comuníquese con el Departamento de Justicia para denunciar una violación de los derechos civiles. Recuperado de <https://civilrights.justice.gov/report/>
- [49] Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. (s.f.). Trabajo en curso. Recuperado de <https://oig.justice.gov/ongoing-work>
- [50] Wikipedia. (s.f.). Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/OrganizedCrimeDrugEnforcementTask_Force
- [51] Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. (s.f.). Comisión de Sentencias de los Estados Unidos: Página principal. Recuperado de <https://www.ussc.gov>
- [52] Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. (s.f.). Informes de auditoría. Recuperado de <https://oig.justice.gov/reports/type/audit>
- [53] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado. (s.f.). Grupos de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado. Recuperado de <https://www.justice.gov/ocdef>
- [54] Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. (s.f.). Acerca de los comisionados. Recuperado de <https://www.ussc.gov/commissioners>
- [55] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Manual de Organización, Misión y Funciones. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/organization-mission-and-functions-manual>
- [56] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito Norte de Illinois. (s.f.). Comité Coordinador de las Fuerzas del Orden (LECC). Recuperado de <https://www.justice.gov/usao-ndil/programs/lecc>
- [57] Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Oficina de Acceso a la Justicia - Departamento de Justicia. Recuperado de <https://www.justice.gov/doj/office-access-justice>
- [58] Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Acerca del Departamento de Justicia. Recuperado de <https://www.justice.gov/about>
- [59] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles. (s.f.). Sección de Coordinación y Cumplimiento Federal. Obtenido de <https://www.justice.gov/crt/federal-coordination-and-compliance-section>
- [60] Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (s.f.). Oficina de Acceso a la Justicia. Recuperado de <https://www.justice.gov/atj>